



Dirección Regional para América Latina y el Caribe

Fondo Fiduciario España-PNUD

“HACIA UN DESARROLLO INTEGRADO E INCLUSIVO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE”

Disminución de la pobreza – Equidad - Gobernabilidad Democrática – Apoyo a países

Newsletter “Construyendo Inclusión y Gobernabilidad”- Número 10 – Abril 2009

Artículos especiales en este número

“La crisis global, sus implicaciones para América Latina y el Caribe y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Por Rebeca Grynspan, Directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

“Corrupción. Más allá de los mitos”. Publicada en el diario El País, de Madrid, domingo 8 de marzo de 2009. Por Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de la Dirección del PNUD para América Latina y Caribe, y Director del Fondo España-PNUD.

Visite el nuevo canal del Fondo, “Inclusión y Gobernabilidad”, en Youtube

<http://www.youtube.com/fondoespnud>

Iniciativa conjunta de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, AECID y UNIFEM, con apoyo del FONDO ESPAÑA-PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo” - Madrid 15-16 junio de 2009

Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe: hacia una agenda para la equidad de género en los Parlamentos



Dirección Regional para América Latina y el Caribe



Más de 60 parlamentarias de 20 países de América Latina, el Caribe y España, se reunirán los próximos 15 y 16 de junio en Madrid para analizar y debatir la situación actual de las mujeres en relación a la equidad de género, avanzar en la elaboración de una agenda de género y en las estrategias parlamentarias que contribuyan a su ejecución. El Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe es organizado por la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, y cuenta con el apoyo del Fondo España PNUD “Hacia un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Caribe”. Será inaugurado por Consuelo Femenia, Directora para América Latina y el Caribe de la AECID; Rebeca Grynspan, Directora para América Latina y el Caribe del PNUD, y Gladys Acosta, Directora Regional de UNIFEM para América Latina y El Caribe.

Las conquistas en el ámbito del género de las últimas décadas, en cuanto a derechos y equidad, han tenido su reflejo en la representación política y, en particular, parlamentaria. Según datos de la CEPAL, en los últimos años el incremento en la proporción de mujeres accediendo a sitios de poder en diversas esferas de la vida pública de la región es uno de los fenómenos que definen el nuevo rostro de la democracia latinoamericana.

Una reciente consulta de este organismo a 400 líderes recogió evidencias de sustanciales modificaciones en la opinión pública, con la mayoría de los consultados considerando que el aumento de la participación política femenina en el continente y la paridad política entre hombres y mujeres son procesos en curso, vigorosos y probablemente irreversibles. La misma mayoría estuvo de acuerdo con los objetivos y los instrumentos que impulsan este proceso, incluyendo las acciones informativas y leyes de cuotas.

Tal como señala, el Informe “Promoción de la Participación Política de las mujeres en América Latina y el Caribe”, elaborado por PRIGEPP – FLACSO para el Fondo España PNUD, los logros cuantitativos relacionados con la elección de senadoras y diputadas a los parlamentos son disímiles, siendo escasamente alentadores en el primer caso (cámaras altas) donde las cristalizaciones del poder tradicional son más severas que en las cámaras bajas. Aunque el porcentaje de senadoras ha ascendido al 14.9 en la región, éste es un rango aún muy lejano a lo que podría ser acercarse a una masa crítica, mientras de los 9 países con sistema bicameral que existen en la región, cinco –Uruguay, Paraguay, Chile Bolivia y República Dominicana— tiene una representación menor al 10%.

Sin embargo, los avances en los porcentajes promedios de mujeres diputadas en América Latina son notables y se han duplicado. En 1997, el promedio de diputadas tan sólo ascendía al 10.8%. Únicamente dos países, Argentina y Costa Rica, superaban el 15 % de representación mientras ocho, Panamá, Honduras, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil Venezuela y Paraguay, no llegaban al 10%. Actualmente, el promedio ha subido hasta llegar al 21.1% en toda la región. Los datos sobre los últimos porcentajes alcanzados por las parlamentarias o asambleístas en cuatro países que se cuentan en los 4 primeros puestos latinoamericanos, --Cuba, Argentina, Costa Rica y Ecuador, donde las legisladoras han llegado a constituir el 43.2 %, 40.3 %, 38,6 % y 34.6 % respectivamente—revelan que no solo todos ellos han sobrepasado el 30%, porcentaje que en los primeros años del 2000 se consideraba la “masa crítica”, sino que se acercan a la paridad, ponen en evidencia una tendencia sostenida que permite hablar de la existencia de un horizonte objetivo para el establecimiento de paridad en países como Argentina y Costa Rica, y siguiéndole de cerca, Ecuador. En palabras de Sonia Montaña, citada por Ximena Machicao (2006), estos y los logros relativos a la llegada de mujeres a las primeras magistraturas, permitirían sostener que “estamos ante la irrupción democrática de expresiones originales de las políticas de la identidad que pueden traducirse en cambios en las relaciones de poder tradicionales”.

Los datos que aquí se comparten dan muestra elocuente de estos avances, así como hacen evidente que queda mucho camino por recorrer.

Cuadro 3
Mujeres en gabinetes ministeriales a noviembre de 2007

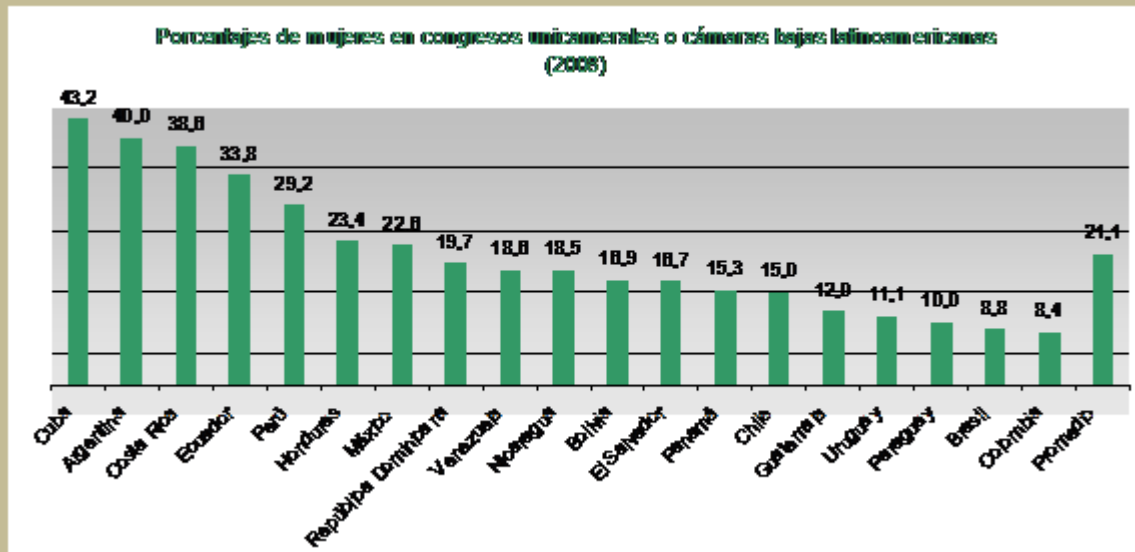
Pais	Porcentaje de mujeres en el gabinete
Costa Rica	37,5%
Chile	36,4%
Ecuador	32%
Bolivia	31,3%
Nicaragua	31,2%
Uruguay	30,8%
Perú	26,7%
Argentina	25%
Guatemala	25%
Honduras	25%
Colombia	23,1%
Panamá	21,4%
México	20%
Venezuela	18,5%
República Dominicana	17,6%
El Salvador	15,4%
Brasil	14,3%
Paraguay	10%
Promedio América Latina	24%

Fuente: IDEA Internacional 2007a.

Cuadro 5
Mujeres en cámaras altas al 2007

Pais	Porcentaje
Argentina	38,9%
México	17,2%
Brasil	12,3%
Colombia	11,8%
Uruguay	9,7%
Paraguay	8,9%
Chile	5,3%
Bolivia	3,7%
República Dominicana	3,1%
Promedio	14,9%

Fuente: Cifras de Inter-Parliamentary Union 2007.



Las mujeres parlamentarias comparten retos específicos de la función además de ser actoras fundamentales en la construcción de una agenda de género. El Encuentro tiene por objetivo analizar y debatir la situación actual de las mujeres en relación a la equidad de género, para avanzar en la elaboración de una agenda así como en las estrategias parlamentarias que contribuyan a su consecución. El debate girará en torno a tres temáticas claves:

- Las mujeres como protagonistas clave del desarrollo frente a la crisis económica
- Fortalecimiento de la participación política de las mujeres en Iberoamérica
- Desarrollo de una agenda de género en los Parlamentos de Iberoamérica

Las ponencias de los debates irán a cargo principalmente de parlamentarias y de expertos/as de agencias internacionales de cooperación al desarrollo de reconocida experiencia y trayectoria en las temáticas abordadas. Asimismo, se dará espacio para que algunas instituciones públicas de la región expongan experiencias exitosas de colaboración con los parlamentos nacionales.

Paralelamente al encuentro, y complementando al mismo, se realizará una Feria de Conocimiento, donde parlamentarias, mecanismos nacionales de la mujer y movimientos de mujeres expongan sus experiencias en los temas que aborda el Encuentro.

Por más información, por favor escribir a: regina.salanova@undp.org

Entrevista exclusiva a Mirta Roses, Directora de la Organización Panamericana de la Salud **“Se deben evitar los errores cometidos en los programas de ajuste estructural”**

La actual crisis económica global impacta de lleno en los países de nuestra región y sus efectos golpean con especial fuerza a los sectores sociales más desprotegidos. El campo de la salud representa un desafío de particular relevancia y exige acciones coordinadas e inmediatas. Mirta Roses es una de las voces más autorizadas para alertar sobre la situación y guiar la respuesta que la región necesita. Médica argentina de notable trayectoria, Roses es la primera mujer en dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Fue de una de las conferencistas principales del Segundo Foro de Pensamiento Social Estratégico, organizado por el Fondo España PNUD en noviembre de 2008, que reunió a 30 Ministros y altas autoridades sociales de 18 países.



1) ¿Qué impactos prevé la OPS tendrá la actual crisis financiera en el ámbito de la salud de la región?

Los grupos sociales más vulnerables se verán fuertemente afectados, como consecuencia del incremento en el desempleo y el aumento en el empleo informal, o en el familiar no remunerado, así como por la reducción en remesas que son vitales para las familias receptoras y la economía local. Esto a su vez implicará aumentos en la pobreza (las estimaciones preliminares indican que al menos 15 millones de personas se sumarán a los pobres ya existentes en Latinoamérica y el Caribe), en la desnutrición y en la exclusión del acceso a los servicios básicos, incrementando con todo ello los niveles de inequidad que ya de por sí son el principal problema histórico de la Región.

La suma del deterioro de estos y otros determinantes sociales tendrán un impacto significativo sobre la salud de las personas, en especial de aquellos grupos que viven en situaciones al límite de la sobrevivencia. Habrá además menor posibilidad de efectuar los gastos de bolsillo en atención sanitaria que son aún muy altos en la Región, y si deben gastar de manera directa porque enfrentan una situación con riesgo de vida, eso tendrá un efecto catastrófico para esas familias al agravar su situación de pobreza.

A la menor capacidad personal y familiar de afrontar gastos de bolsillo en salud, se suma la mayor competencia que tendrán los pobres para utilizar los servicios públicos gratuitos, al desplazarse la clase media empobrecida o la clase trabajadora desempleada y sin seguro hacia el sector público. Se suma a esto el riesgo de que se reduzca el personal o el presupuesto asignado a los servicios públicos por la posible reducción de ingresos fiscales que resulta de un menor dinamismo económico.

Y esto se da justo en momentos en que, por efecto de la crisis financiera, la asistencia internacional para el desarrollo también estará sufriendo presiones muy fuertes. Esta especie de tormenta perfecta plantea una amenaza a las posibilidades de cumplimiento real de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de que se enfrenten retrocesos en el ámbito de la salud pública en la región.

2) ¿Qué respuestas deben plantear los países? A la luz del Segundo Foro de Pensamiento Social Estratégico y entendiendo que cada país define sus propias metodologías, ¿cómo sugiere la OPS coordinar hacia dentro de los gabinetes sociales esas respuestas?

Lo más importante es la comprensión de que se deben evitar los errores cometidos en los programas de ajuste estructural que llevaron a una desinversión en el sector social. Ceder a esa tentación sería un grave error, pues agravaría los efectos de la crisis, implicaría un retroceso en el capital humano acumulado y haría aún más difícil salir de la crisis y, luego, subsanar sus efectos. Sería el error más costoso que se puede cometer, pues además de los efectos negativos en términos de gobernabilidad y estabilidad tomaría muchos, muchos años enmendarlo.

La forma más efectiva de aminorar los efectos inmediatos y los de largo plazo de la crisis es preservar la inversión en capital humano y fortalecer los mecanismos de apoyo a las familias. En este sentido, hay una particular necesidad de proteger y fortalecer las redes de protección para las personas en condición de pobreza y los grupos más vulnerables de la sociedad. En este sentido, quisiera recalcar la extrema importancia de velar por efectuar las inversiones sociales que requiere la juventud de la Región. Si no las hacemos ahora, las consecuencias las pagaremos en el mediano y largo plazo. Es la generación que debemos proteger.

Es claro, al mismo tiempo, que las circunstancias económicas obligan a poner aún mayor atención a la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos. Desplazar las inversiones hacia la promoción de la salud y la prevención, demorando las inversiones de alto costo en tecnología o infraestructura que puedan postergarse hasta que retorne el repunte económico; proteger a los trabajadores de la salud para que no migren y no se genere más desprotección; hacer más eficientes los sistemas de compra y distribución de insumos críticos. Es la oportunidad de revisar las políticas públicas y hacer los cambios necesarios, muchas veces postergados por intereses de grupos, que ahora pueden ser más viables por el interés común de la reactivación económica. De ahí que una estrecha coordinación entre los distintos actores del sector social sea aún más relevante, para asegurar que el esfuerzo de la sociedad en su conjunto para proveer recursos financieros adecuados para la inversión social rinda los mayores frutos posibles. El estudio de los determinantes sociales de la salud ha mostrado claramente que el esfuerzo de todos los componentes del sector social está profundamente entrelazado y que una adecuada coordinación genera abundantes sinergias y beneficios sociales.

3) ¿Qué tipo de coordinación regional debe ponerse en marcha?

He señalado en varias ocasiones que, en mi opinión, este es el siglo de las redes. Y las difíciles circunstancias deben llevarnos a maximizar el poder de esas redes para potenciar la acción de cada uno de sus integrantes. De ahí que a nivel regional debemos fortalecer las alianzas que nos permiten maximizar los resultados de nuestros esfuerzos.

Eso es algo que, por ejemplo, ya hemos estado haciendo las agencias de la ONU que trabajamos en la Región, con resultados muy satisfactorios. Pero precisamente por eso tenemos que llevar ese esfuerzo aún más allá. Tenemos que fortalecer las alianzas con las instituciones financieras internacionales, con las agencias de cooperación internacional, con las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el campo social, con las instituciones religiosas, las alianzas bilaterales o subregionales, la participación del sector privado y, de modo muy especial, el papel de las asociaciones de la comunidad y del voluntariado.

Es muy relevante incrementar el papel de los socios comprometidos con la salud. Siempre he dicho que en esto somos particularmente afortunados en la OPS y en la Región en general. Contamos con muchos socios comprometidos con la salud pública y mucho de nuestro papel es lograr los niveles de coordinación y entendimiento necesarios para aprovechar plenamente la labor de todos y cada uno de ellos, actuando sinérgicamente. Todos los que estamos involucrados en el sector social debemos promover esa ampliación y coordinación de redes sociales para incrementar nuestras posibilidades de hacer frente a los difíciles retos que nos plantea la crisis.

4) ¿Qué conclusiones quisiera compartir del Segundo Foro de Pensamiento Social Estratégico?

La primera conclusión es algo que los médicos sabemos por experiencia: cuando el paciente está en crisis es el momento de dedicarle nuestra mayor atención y cuidados, nunca menos. Frente a las ominosas dificultades que nos plantea la crisis financiera, no se puede cometer el imperdonable error de descuidar al paciente, sino que se debe garantizar que el sector social cuente con los recursos necesarios para aminorar los efectos que la crisis tendrá sobre los sectores más débiles de la población. Si a algo nos llama esta situación delicada es a fortalecer e incrementar los recursos del sector social, para poder atender las mayores necesidades que enfrentará, y así aminorar el impacto de la crisis sobre los grupos más vulnerables.

Es también evidente la necesidad de fortalecer e intensificar nuestras alianzas, nuestras redes de acción en el campo social, para que articulando los esfuerzos de todos los que actuamos en ella, podamos multiplicar nuestra capacidad de respuesta frente a la crisis. Los avances notables que hemos tenido en este campo, deben servirnos de aliciente para continuar profundizando esas alianzas, y aumentar así la capacidad de apoyo mutuo entre los países de la Región y a lo interno de éstos.

Por último, hay que producir políticas públicas comprensivas, que definitivamente dan mucho mejores resultados por dinero invertido que políticas fragmentadas en tiempo, espacio o territorio, que no producen el “clic” del desarrollo sostenible de las comunidades y de las familias. Es claro que a nivel de cada país son fundamentales los esfuerzos de coordinación del sector social, tanto entre sí como en la creación de alianzas y redes a lo interno del país, para asegurar que el esfuerzo de la sociedad para proveer recursos financieros adecuados para afrontar las demandas planteadas por la crisis se traduzcan en elevados réditos sociales.

Sitios e información de interés de la OPS:

Link al sitio de Equidad, Salud y Desarrollo Humano: <http://66.101.212.219/equity/>

List archives website: <http://listserv.paho.org/archives/equidad.html>

Comienza el 4 de mayo tras un gran éxito de convocatoria **170 profesores y 94 Universidades participarán en el Primer Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial**

El 4 de mayo próximo dará comienzo, con conferencias del Premio Nobel Amartya Sen, el Premio Nobel Joseph Stiglitz, y el Asesor Principal de la Dirección del PNUD para América Latina y Caribe, y Director del Fondo España-PNUD, Bernardo Kliksberg, el Primer Programa Iberoamericano de Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este programa de formación en modalidad virtual, sin antecedentes en su tipo, permitirá llegar a 170 profesores de 94 Universidades en la región,

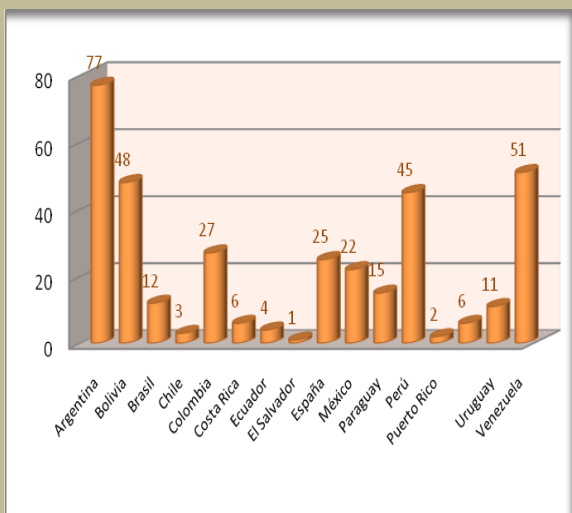
quienes se capacitarán en cómo trabajar la RSE con sus alumnos universitarios. El programa fue diseñado por el Fondo España PNUD, es organizado en colaboración con la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial (REDUNIRSE) y cuenta con apoyo de la Dirección Regional del PNUD para América Latina y Caribe, y la AECID de España. Tiene como objetivo contribuir a la creación de una masa crítica de docentes en el tema de la RSE y está dirigido a docentes e investigadores activos de las universidades de la región en las áreas vinculadas con el tema.

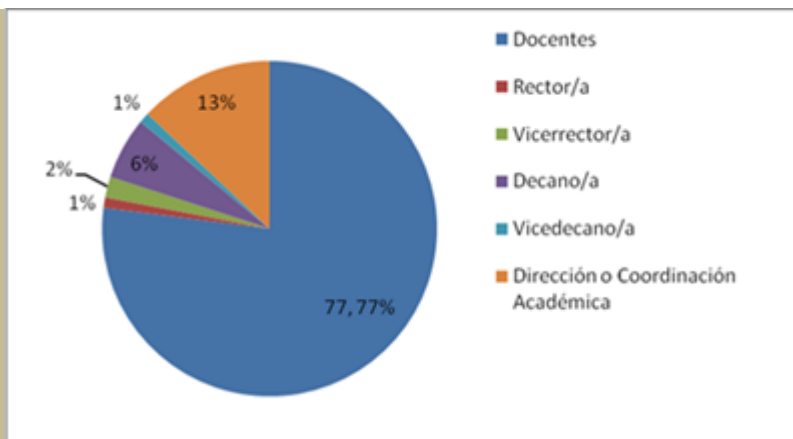
Las respuestas a la actual crisis económica y los desafíos del desarrollo, en general, requieren de un alto compromiso del sector privado. La originalidad de esta propuesta de formación en una temática de tal envergadura ha tenido una gran recepción: se recibieron candidaturas procedentes de 116 universidades de España y América Latina y se presentaron 355 postulaciones. El número de catedráticos seleccionados para participar en el Programa alcanza los 170, provenientes en su mayor parte de universidades afiliadas a REDUNIRSE (que cuenta con 106 universidades afiliadas, a abril de 2009).

El Programa cuenta con una selección de profesores participantes de altísimo nivel académico, siendo Doctores o Doctorandos un 38% de ellos. Asimismo, hay 12 Decanos y Vicedecanos, 5 Vicerrectores y un Rector. Geográficamente, los seleccionados provienen de universidades de 16 países de Iberoamérica.

El Programa de Formación contará con una segunda edición, prevista para el segundo semestre del 2009.

Procedencia de los candidatos





Responsabilidades Académicas de los participantes en el Programa

Avanzan los preparativos del Primer Seminario de Formación de Liderazgos Juveniles Mayas

El Fondo España-PNUD apoya a las comunidades mayas

Consolidando la alianza y el trabajo conjunto, la Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente (CDRO), prestigiosa organización maya con sede en Totonicapán, Guatemala, invitó al Fondo España PNUD a su Asamblea anual de líderes indígenas. La Asociación CDRO está organizada para impulsar el desarrollo integral y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural del departamento de Totonicapán, en base al establecimiento y funcionamiento de proyectos, sistemas de servicio, programas e instituciones que mejoren su capacidad productiva, con la metodología de la participación comunal y buscando su sostenibilidad. Desde sus inicios en 1984, esta organización líder en capital social y un referente en toda la región, se ha presentado como tejido organizativo horizontal, integrado por diversas comunidades indígenas. Su propósito es apoyar el desarrollo, a través de la metodología de la participación total de la comunidad, basada en la cultura propia y en el uso de la ciencia y tecnología disponibles. La XXIII Asamblea Anual de CDRO eligió y juramentó a los nuevos integrantes de los órganos directivos de la asociación. En representación del Fondo estuvo Isabel Licha, Asesora Principal en Política Social. El PNUD Guatemala se hizo presente en la Asamblea a través de René Mauricio Valdés, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y Representante Residente del PNUD; Claudia de Saravia, coordinadora de Programas del PNUD; Natalia García, oficial interagencial para el Logro de los ODM, y Miguel Angel Balcarcel, coordinador del proyecto Partidos Políticos y Construcción de Ciudadanía.

Uno de los desafíos principales que enfrenta la comunidad maya es la capacitación de su juventud, altamente comprometida con el desarrollo de su colectividad. En respuesta a estas necesidades, el Fondo España PNUD y CEDRO están organizando el Primer Seminario de Formación de Liderazgos Juveniles Mayas. En este sentido, la visita a la Asamblea fue también marco de una reunión preparatoria clave del Seminario. En el encuentro participaron Isabel Licha, Antonio Bernabé Vasquez (Director del Departamento de Atención a la comunidad de CDRO) y Germán Gutiérrez (Director General del CERCAP – Centro Regional de Capacitación de CDRO). Hubo definiciones en aspectos fundamentales, como los territorios mayas a ser involucrados en la propuesta. El seminario se llevará a cabo del 10 al 14 de Junio, en Antigua, incluirá a 25 líderes de Totonicapán y se extenderá la invitación a varios departamentos mayas para incluir a 25 líderes más de otras comunidades (Sololá, Quiché, San Marcos, Chichicastenango, entre otras).

El Fondo España PNUD apoya además –junto al PNUD local y las agencias de la ONU en el país-, el proyecto “Fortalecimiento del Capital Social para la reducción de la desnutrición crónica en el municipio de Totonicapán”, que apunta a mejorar las condiciones de organización de sistemas comunales en el crítico tema de la desnutrición, altamente extendida en los niños indígenas de Guatemala.

Artículos especiales

La crisis global, sus implicaciones para América Latina y el Caribe y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Por Rebeca Grynspan, Directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. 24 de marzo 2009.

Después de seis años de crecimiento del ingreso per cápita, muy probablemente en 2009 el ingreso per cápita en la región de América Latina y el Caribe disminuirá en casi todos los países, con algunas excepciones, así como también lo hará el ingreso per cápita promedio de la región. Los pronósticos van desde -3% (Barclays) de crecimiento en 2009 a 1.9% (CEPAL) –JP Morgan estima -1.3%, mientras que HSBC -0.1%. Esta es una reducción significativa comparada con las

tasas de crecimiento del 5.5% en 2006 y 2007, y 4.6% en 2008.

Pese a que el desempeño macroeconómico de la región durante los últimos años la pone en una situación más estable para enfrentar la crisis (respecto a como lo estaba hace casi 30 años), es cierto que la desaceleración traerá, sin duda, impactos severos a una gran parte de la población de América Latina y el Caribe, no sólo a los pobres, sino también a las clases medias urbanas vulnerables. La severidad de los impactos dependerá de i) la duración de la crisis, ii) de cómo respondan los gobiernos y de la posibilidad de formar consensos de amplia participación para enfrentar la crisis iii) y de cómo apoye la comunidad internacional los esfuerzos que se realicen en esta materia.

Todos los motores de crecimiento de la región están afectados: el comercio internacional se contraerá debido a la caída de la demanda por bienes manufacturados y servicios, especialmente el turismo (México, el Caribe y Centroamérica) y por una aguda caída en los términos de intercambio para los exportadores de bienes primarios del sur, mientras que la exposición al comercio ha crecido en las últimas dos décadas. Además, todas las fuentes de financiamiento, tales como remesas e inversión extranjera directa, pero también el crédito privado, han mostrado una importante caída. En cuanto a las remesas todavía hay un debate ya que en algunos países han caído y en otros lo que se ha visto es una desaceleración pero en todo caso ya no puede ser considerada como una fuente de financiamiento que se seguirá expandiendo.

Las condiciones que impulsaron el rápido crecimiento de la región durante los últimos seis años se han ido: expansión del comercio internacional, precios altos de bienes básicos, financiamiento abundante y tasas de interés bajas (Ocampo, J.A. 2009).

Y ante este panorama, ¿Porqué decir que estamos mejor preparados hoy que en la década de los ochenta? Primero, América Latina y el Caribe difiere de los ochenta en términos de indicadores macroeconómicos importantes: los niveles de inflación, con algunas excepciones, han sido menores; la política del sector público es más fuerte y el nivel de endeudamiento también es menor, con excepción del Caribe. El déficit fiscal promedio para la región en 1981 era 8% del PIB, mientras que en 2007 el mismo fue un superávit de 3.7%. En 1982 la proporción de deuda externa respecto al PIB era de 45%, mientras que en 2007 fue de 25.8%, y el nivel de reservas internacionales es mucho más alto hacia finales de 2008. Segundo, la mayoría de los países han puesto en marcha importantes programas sociales (85 millones de latinoamericanos reciben apoyos bajo esquemas de transferencias condicionadas en efectivo), así como otros programas sociales exitosos. Sin duda una razón de nuestra mayor fortaleza para enfrentar la crisis ha sido el fortalecimiento de las instituciones económicas y también sociales de la región.

Sin embargo, prevalecen debilidades importantes: la región continúa siendo muy dependiente de la exportación de bienes básicos. Asimismo, a pesar de los avances, la desigualdad y la pobreza siguen siendo muy altas y la política social no ha transitado de una lógica con base en programas a una visión integrada de protección social. Los esquemas de seguridad social y de protección social tienen baja cobertura, muestran segmentación clara y tienen beneficios no adecuados para grandes sectores de la población. Igualmente si bien el aumento de la cobertura en educación y salud son sin duda buenas noticias, la calidad de estos servicios que recibe la población más pobre sigue siendo altamente deficiente produciendo rendimientos más bajos de lo esperado bajos a la inversión realizada.

Lo anterior explica porqué en nuestra región la volatilidad de consumo es mayor que la volatilidad del PIB, y por qué en la desaceleración del ciclo económico, la pobreza y la desigualdad crecen de manera rápida y se recuperan de manera lenta cuando la economía crece. Tomó 25 años alcanzar los niveles de pobreza que teníamos antes de la crisis de deuda de los 80s. Lo cierto es que hemos mejorado pero ha faltado tiempo para consolidar los logros ya que son muy recientes. Inclusive los análisis que dan cuenta de la ampliación de los sectores medios también muestran la vulnerabilidad de estos sectores que pueden sufrir procesos de empobrecimiento fácilmente.

Los choques negativos están ya teniendo consecuencias macroeconómicas en la región. La caída en el precio de los bienes básicos y la contracción en la demanda externa ha resultado en un deterioro importante en las cuentas corrientes de la región. Este deterioro es mayor en los países exportadores de petróleo. Además CEPAL estima que la pérdida de ingresos tributarios como consecuencia de la caída en los precios de los bienes primarios como gas, petróleo y cobre podría llevar a una caída de los ingresos tributarios directos de entre 7 y 8% del PIB.

Por otro lado, las monedas locales se han depreciado con relación al dólar, presionadas por los requerimientos de liquidez del sector privado debido a su nivel de endeudamiento. De acuerdo con estimaciones de diciembre 2008, los vencimientos de deuda privada en la primera mitad de 2009 serían arriba de 30,000 millones de dólares.

En repetidas ocasiones, con las crisis permitimos que la pobreza coyuntural se convirtiera en pobreza estructural. Debido a la falta de protección, la ocurrencia de eventos irreversibles (aumento de la mortalidad materna, de la desnutrición y mortalidad infantil y de la deserción escolar) tiene consecuencias de largo plazo y efectos permanentes en el bienestar de la siguiente generación.

Los choques negativos tendrán consecuencias sociales, especialmente a través de su impacto potencial sobre el empleo

y la pobreza. Según estimaciones recientes de la OIT, si se considera una tasa de crecimiento de alrededor de 2%, el desempleo en la región puede aumentar en el peor escenario de 7.2% a 8.3% entre el 2007 y el 2009. Lo anterior significa un aumento de cuatro millones de desempleados.

En el mismo informe, la OIT estima que las personas que están activas en el mercado laboral, pero ganan un ingreso menor a la línea de pobreza de dos dólares diarios del Banco Mundial (lo que denomina la OIT como trabajadores pobres), podrían aumentar de 6.8% en 2007 a 8.7% en 2009. Lo anterior implica un aumento de cinco millones de trabajadores pobres en América Latina y el Caribe, y no incluye el impacto sobre la pobreza debido al desempleo abierto. Tomando el escenario más pesimista de los tres presentados por la OIT, y sin tomar en cuenta el impacto de las respuestas de los gobiernos (un escenario pasivo), el desempleo y empleo vulnerable en la región podrían incrementarse considerablemente.

De no tomarse las medidas pertinentes, los efectos negativos de la crisis podrían, incluso, revertir los logros alcanzados hasta ahora en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente los referidos a reducción de la pobreza extrema, la desnutrición y la mortalidad infantil y materna.

Estimaciones de la CEPAL^[1] muestran que en 2007 el 12.7% de la población de la región era indigente, comparado con el 22.5% en 1990. Esta tendencia implica que la región en su conjunto ha avanzado un 87% en el cumplimiento de la primera meta, haciendo posible el cumplimiento hacia 2015. Sin embargo, ante un escenario de nulo crecimiento y escalada de precios, la incidencia de la pobreza extrema podría incrementar de 12.7% a 15.6%, lo que representaría en un escenario pasivo el regreso a la indigencia de hace 4 o 5 años. Si no hay escalada de precios y hay medidas de política pública el impacto podría disminuir de manera importante.

En materia de desnutrición, la región en su conjunto ha alcanzado un 59% en el cumplimiento de la meta. Existen, sin embargo, diferencias importantes entre países, mientras en algunos el avance es aún insuficiente, países como México y República Dominicana ya alcanzaron la meta, y se preveía que el resto tenía altas posibilidades de alcanzarla. Lamentablemente, el impacto de la crisis en la región podría suponer un descenso de 59% a 55% en el avance logrado hasta ahora. Una situación similar ocurriría en términos de mortalidad infantil, que actualmente registra en la región 22 muertes por cada mil nacidos vivos y que podría incrementar a 26 casos, tal y como sucedía a principios de la actual década. Por otro lado, si bien se ha avanzado de forma destacada en la atención prenatal y del parto por personal calificado, el cumplimiento de la meta de reducción de la mortalidad materna está aún lejos de alcanzarse: en Argentina, Chile y Costa Rica se registran tasas inferiores a 50 muertes por cada 100 mil nacimientos, mientras que en el resto hay tasas que oscilan entre 60 en Venezuela, hasta 630 en Haití. El panorama económico actual restringiría aun más el avance en esta materia.

Los efectos de la crisis sobre el empleo, la pobreza y otros indicadores sociales, deben atacarse con iniciativas concretas incluidas en las estrategias que los gobiernos han implementado como respuesta a la situación global. Los programas de protección del empleo, seguro de desempleo y creación de empleos deben discutirse como una opción de política, así como empleos en proyectos públicos de infraestructura, sobre todo pequeños proyectos en localidades pequeñas y comunidades, así como la creación de programas de empleo femenino ya que los paquetes de estímulo en infraestructura no crean empleo femenino. Los programas de empleo son muy importantes especialmente para darle una respuesta a los sectores medios vulnerables (especialmente urbanos) que no reciben apoyo de otros programas del Estado dirigidos únicamente a las poblaciones más pobres.

Los programas de transferencias condicionadas en efectivo deben afinarse para permitir la incorporación de las personas afectadas por la crisis así como de ser posible reforzar sus incentivos.

En donde no existan programas de transferencias condicionadas, se deben implementar programas específicos para mantener a los niños y jóvenes en las escuelas, así como fortalecer los esquemas de salud para madres y niños.

Más importante aún, debe discutirse una visión integrada de la protección social que vaya más allá de la lógica basada en programas. Lo que la región necesita y no ha podido lograr en las últimas dos décadas, es un sistema integral de protección social universal. La crisis llega de nuevo en una situación en la que el Estado no ha desarrollado las herramientas necesarias para apoyar a todos los grupos vulnerables de la población.

Igualmente importante son los programas que eviten el “crowding out” de las pequeñas y medianas empresas por las empresas grandes que ahora acuden en busca de crédito a nivel nacional al cerrárseles las puertas del financiamiento externo y nuevamente recordar que la crisis de los alimentos no se ha terminado y que es necesario no olvidar la llamada de atención sobre la marginación y abandono de las políticas agropecuarias especialmente las dirigidas a la pequeña propiedad agrícola.

Debemos ser justos y reconocer los esfuerzos que los gobiernos de la región han hecho. Este es un momento en el que

^[1] Utilizan líneas de indigencia oficiales de cada país y no la línea de pobreza de un dólar PPC.

se necesita de la ayuda internacional, especialmente para los países pequeños y medianos. A pesar de las mejoras, la mayoría de los países no cuentan con el espacio fiscal para enfrentar estos retos por ellos mismos. Aunque sus gobiernos ya ha empezado a anunciar paquetes de estímulo, se necesita dinero rápido e incondicional (incluyendo al FMI) y apoyo fiscal de parte del Banco Mundial para generar políticas sociales contracíclicas. Las instituciones regionales (BID, CAF, BCIE y FLAR) están ayudando, pero la suma de toda la ayuda aún es insuficiente para cubrir las necesidades de financiamiento de la región.

Creemos que la cooperación internacional, ante este entorno de crisis, debe obedecer a principios esenciales. Primero, la cooperación internacional debe poder ser contracíclica y apoyar los programas contracíclicos de los Gobiernos. Segundo, debe establecerse un compromiso, no sólo de aportar, sino de revisar y mejorar la efectividad de la cooperación. Tercero, más allá de la ayuda financiera, se debe revisar a fondo el papel que desempeñan los organismos internacionales.

La cooperación internacional no debe reducirse porque deben ejecutarse políticas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis, y que no pueden financiarse con endeudamiento externo dada la situación del mercado internacional de crédito. Programas como seguros de desempleo y de apoyo al empleo, políticas de ayuda alimentaria, así como estrategias para fortalecer los sistemas de salud y educación, parecen hoy, más que nunca, indispensables. Las instituciones regionales (BID, CAF y FLAR) están ayudando, pero esta ayuda aún es insuficiente.

Una estimación reciente muestra que alrededor de US \$1 trill. sería adecuado para el mundo en desarrollo (Birdsall, 2009) La cantidad debe provenir de forma inmediata e incondicional del FMI (cerca de la mitad de los fondos) y de otros bancos multilaterales (WB, IDB, ADB). Estos organismos tienen los mecanismos necesarios para ayudar a los países a utilizar los recursos adecuadamente. En la próxima cumbre del G20 deberán emitirse estrategias adecuadas para ayudar al mundo en desarrollo y definir el monto de la cooperación.

En resumen, América Latina y el Caribe está enfrentando una crisis global, después de un periodo de desempeño económico positivo y estable, para la que estamos mejor preparados pero a la cual no somos inmunes. El costo social puede ser muy elevado y distribuirse de manera desigual entre los países de la región. El costo puede ser elevado también en términos de la gobernabilidad democrática especialmente por las posibilidades de un mayor deterioro de la seguridad ciudadana.

Como toda crisis esta es una oportunidad para que las respuestas a la crisis sean incorporadas en una estrategia de largo plazo para hacer frente a los problemas estructurales de la región. Debemos recordar que el corto y el largo plazo inician al mismo tiempo. La mayor rentabilidad de la inversión en el largo plazo es sin duda evitar los costos sociales que pueden sucederse hoy. Debemos aprender de la historia que nos enseña que son los países que hacen lo correcto sin divorciar la ética de la economía, los que muestran el mayor desarrollo económico y social después.

En cuanto a los objetivos estructurales pendientes debemos: i) enfocarnos en la pobreza con una estrategia sensible a la desigualdad, ii) integrar las políticas sociales y económicas para disminuir la vulnerabilidad de los sectores medios (menor vulnerabilidad a los choques), iii) diseñar sistemas de protección social que reduzcan la fragmentación social y mejoren la calidad de los servicios públicos y la cohesión social, vi) aprovechar para promover la diversificación productiva (la devaluación que han sufrido las monedas es una ventana de oportunidad en esta dirección si se complementa con los incentivos correctos), vi) pensar en las inversiones en una producción más ecológica, con un mayor desarrollo de las tecnologías limpias y mayor consideración al cambio climático y vii) mejorar nuestra fiscalidad y nuestras instituciones democráticas y estatales.

Para hacer los cambios estructurales necesarios es necesario lograr acuerdos básicos en la sociedad, que den cuenta de la posibilidad de un proyecto común de sociedad a pesar de las diferencias al interior del mismo ya que sin duda la democracia es escoger entre opciones, pero a la vez es necesario, en concordancia con las especificidad histórica e institucional de cada país, lograr encontrar los balances y combinaciones adecuadas entre propuestas (en lugar de un movimiento entre extremos polarizantes) y dejar atrás las dicotomías falsas y simplificaciones que permearon mucho del debate en los ochentas y noventas como por ejemplo la dicotomía falsa entre Estado y Mercado (como si fuera necesario escoger SOLO uno de los dos) o entre lo público y lo privado, lo focalizado y lo universal, el Gobierno y la Sociedad Civil, el mercado interno vrs. el mercado externo, la competitividad vrs. la política sectorial

Crisis y oportunidad para una América Latina mejor preparada pero aún vulnerable, donde como decía Prebisch, ojalá que no suceda de nuevo en América Latina que las ideas vayan detrás de los acontecimientos.

Corrupción. Más allá de los mitos

Soborno, coima, mordida... Tres formas de denominar a la auténtica plaga de la sociedad

actual. Una clave para frenar su expansión es mejorar la transparencia de la gestión pública y privada

Por Bernardo Kliksberg, Asesor Principal de la Dirección del PNUD para América Latina y Caribe, y Director del Fondo España-PNUD.

Publicado en el diario El País, de Madrid, Suplemento Dominical del 08/03/2009

Según los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".

Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.

Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:

Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.

Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.

Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.

Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".

Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.

Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y

pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.

Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.

Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.

¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.

Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.

Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.

A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.

Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.

La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".